



INFORME DEL EXPERTO

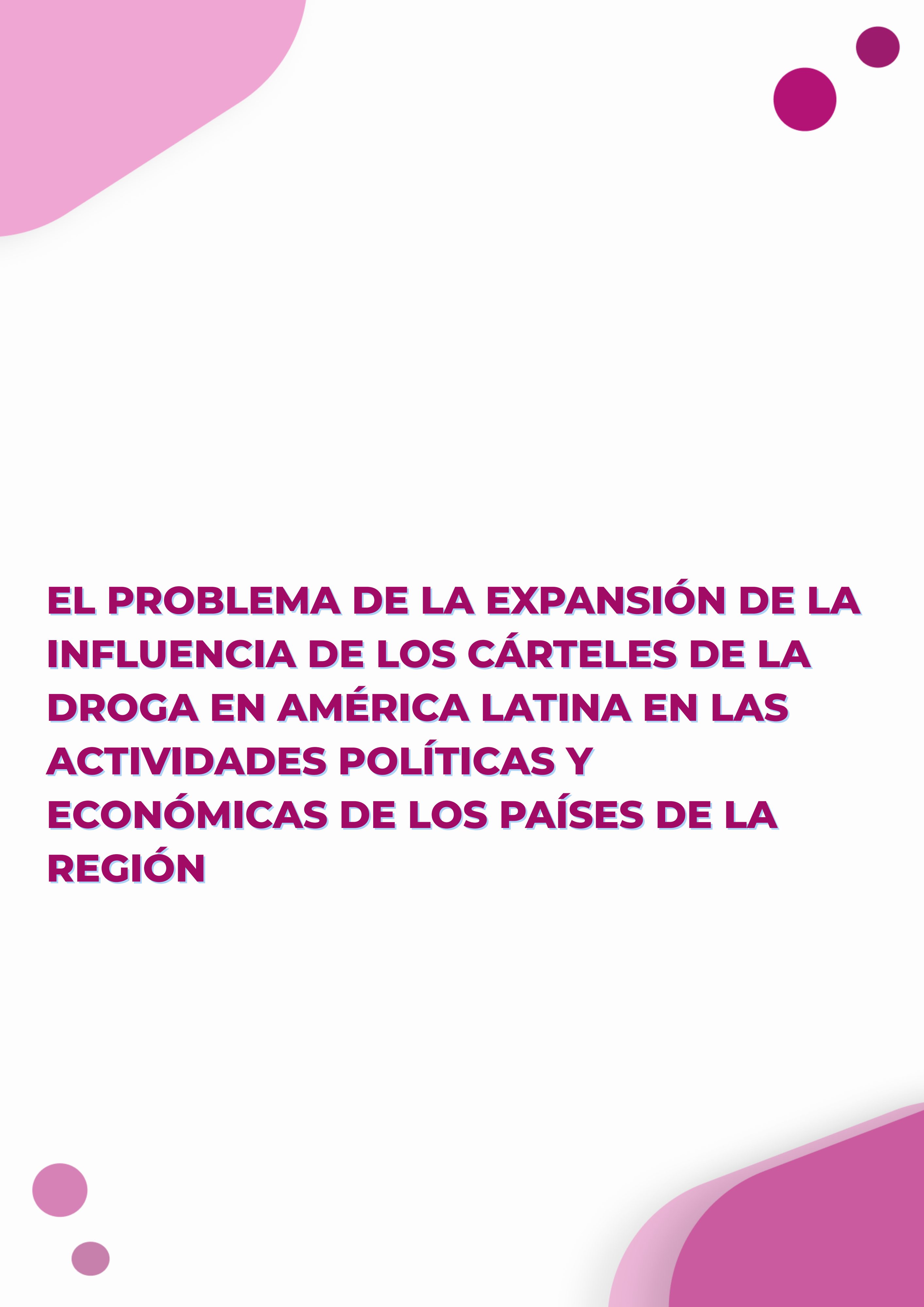
OFICINA DE LAS NACIONES

UNIDAS CONTRA LA DROGA

Y EL DELITO

**MODELO INTERNACIONAL
DE LA ONU DE MOSCÚ
DE VITALI CHURKIN**





EL PROBLEMA DE LA EXPANSIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS CÁRTELES DE LA DROGA EN AMÉRICA LATINA EN LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN



CONTENIDO

Introducción.....3

CAPÍTULO 1: CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO REGIONAL DE LA INFLUENCIA DE LOS CARTELES DE DROGA EN AMÉRICA LATINA.....5

CAPÍTULO 2: RESPUESTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA DE LOS CÁRTELES DE DROGA EN LA POLÍTICA Y ECONOMÍA.....12

CAPÍTULO 3: LA PERSISTENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA: UN DESAFÍO ESTRUCTURAL.....19

CONCLUSIÓN.....22



Introducción

A inicios del nuevo siglo XXI, América Latina atravesó un periodo de crecimiento económico y democratización. Sin embargo, la expansión de los mercados ilícitos acompañó estos procesos, beneficiándose de la apertura comercial, la modernización tecnológica y la intensificación de las rutas migratorias.

Los grupos criminales no solo se consolidaron como actores económicos con capacidad de inversión en actividades legales, sino también como actores sociales y políticos que ofrecen servicios de seguridad, empleo e incluso justicia en territorios marginados. Este nuevo escenario demuestra cómo la movilidad social y económica de la región estuvo acompañada paralelamente por una movilidad criminal que reforzó la interdependencia entre delito y política.

La expansión de los cárteles de droga en América Latina representa una de las amenazas más serias para la estabilidad política y el desarrollo económico de la región. Este fenómeno no puede entenderse únicamente como una actividad criminal, sino como un problema estructural que se alimenta de la debilidad institucional, la desigualdad social y la demanda global persistente.

Además, la creciente influencia del narcotráfico en América Latina demuestra una estrecha y peligrosa relación entre el crimen organizado y el poder político, con graves consecuencias económicas y sociales. Los grupos criminales no se limitan a sus actividades ilícitas tradicionales; buscan activamente controlar y corromper las instituciones de gobierno y los procesos electorales para asegurar la continuidad de sus negocios. Esta situación de vulnerabilidad se debe a la corrupción sistémica, a la debilidad institucional y a la falta de confianza en el sistema judicial. Al infiltrar y corromper a funcionarios públicos, estos grupos moldean las políticas del Estado para proteger sus intereses.

El narcotráfico no es una actividad aislada; está directamente relacionado con una variedad de delitos, como el tráfico de armas y de personas, el secuestro, el lavado de dinero y la corrupción. Es una actividad propia del crimen organizado que se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad, afectando a las clases altas, medias y bajas.

Desde mediados del siglo XX, el narcotráfico ha evolucionado de un simple fenómeno de contrabando a una red compleja y descentralizada de producción y tráfico ilícito. Los poderosos cárteles han redefinido la política, la economía y la sociedad de la región, creando un poder paralelo al del Estado, especialmente en áreas estratégicas. Esta expansión es el resultado de una combinación de factores: una elevada demanda global de drogas, las políticas de mano dura que a menudo fallan en dismantelar las redes y la corrupción que ha facilitado su crecimiento.

La historia de los nexos entre política, delito y economía en América Latina demuestra que el crimen organizado es un problema estructural, no sólo un fenómeno criminal. Se nutre de debilidades institucionales, desigualdad social y mercados ilícitos en expansión. La infiltración de las redes criminales en los gobiernos y los mercados ha borrado los límites entre lo legal y lo ilegal.

A nivel político, la influencia de los cárteles ha dado lugar a lo que se conoce como "narcopolítica". A través de la corrupción, estas organizaciones logran infiltrarse en los sistemas de gobierno, financiando campañas electorales y cooptando a funcionarios para asegurar su impunidad. Ejemplos como la penetración de cárteles en el gobierno local de México o las complejas relaciones entre políticos y narcotraficantes en Honduras evidencian cómo el poder criminal se convierte en una fuerza que opera de forma paralela, y en ocasiones superior, al poder estatal. La violencia, con un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas en países como El Salvador y Colombia, es una herramienta clave para controlar territorios y silenciar a quienes se oponen a su poder.

En el ámbito económico, los cárteles han generado una "narcoeconomía" que distorsiona los mercados. El lavado de dinero es una de las principales operaciones, a través de la cual inyectan vastas sumas de capital ilícito en los sistemas financieros formales. Esto no solo genera competencia desleal para las empresas legítimas, sino que también infla precios, desincentiva la inversión extranjera y reduce los ingresos fiscales del Estado. Además, estos grupos han diversificado sus fuentes de ingresos, incursionando en la minería ilegal, la extorsión y la trata de personas, lo que amplía su control sobre recursos y poblaciones.

Para enfrentar este desafío, se necesita una estrategia multidimensional que vaya más allá de las medidas punitivas y las soluciones nacionales. Es crucial una mayor cooperación internacional y reformas estructurales dentro de los países afectados. Sin un compromiso global real y reformas internas ambiciosas, la influencia del narcotráfico continuará expandiéndose, socavando la democracia, la seguridad y el desarrollo en la región. Por ello, la lucha eficaz debe priorizar la transparencia, el fortalecimiento del sistema judicial, la reducción de la demanda de drogas y el control financiero de las redes criminales.

CAPÍTULO 1: CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO REGIONAL DE LA INFLUENCIA DE LOS CARTELES DE DROGA EN AMÉRICA LATINA

La criminalidad en América Latina, tanto común como organizada, ha llevado a que la región sea vista como una de las más desiguales, violentas y peligrosas del mundo. En 11 de 18 países, la inseguridad es la principal preocupación de la población. Algunos países, como Honduras, Venezuela, El Salvador y Guatemala, registran tasas de homicidios muy altas, muy por encima de las de cualquier otra región, y sin señales claras de mejora.

Sin embargo, no todo puede explicarse de la misma manera. Es importante diferenciar entre crimen común y crimen organizado. Según la Convención de Palermo, el crimen organizado implica actividades ilícitas realizadas por un grupo estructurado de al menos tres personas, con fines de lucro. Aun así, existen más de cien definiciones sobre este fenómeno, lo que refleja su complejidad. Además, no hay una relación directa entre el nivel de crimen organizado en un país y su tasa de violencia: un país puede tener mucho crimen organizado sin ser necesariamente más violento.

En América Latina, la distinción entre crimen organizado, crimen común y redes ilícitas resulta compleja debido a la porosidad de las fronteras que los separan. El crimen común, representado por robos, secuestros o extorsiones de baja escala, se convierte frecuentemente en una puerta de entrada hacia estructuras más sofisticadas. En muchos contextos, las pandillas locales operan como engranajes menores de organizaciones criminales de mayor alcance, responsables del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

El *crimen organizado*, a diferencia del común, se caracteriza por su capacidad de planificación estratégica, su control de territorios y su habilidad para establecer relaciones estables con actores políticos y económicos. Estas organizaciones, lejos de ser entes aislados, se insertan en redes ilícitas transnacionales que conectan a la región con los mercados globales. Así, América Latina no solo se convierte en escenario de violencia, sino también en un nodo fundamental de la economía criminal mundial.

En la región se ven estas diferencias con claridad. En el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la violencia se concentra en zonas empobrecidas y desiguales, como el “corredor seco” de Guatemala. En contraste, en lugares como Puno (Perú), donde el contrabando es común, la violencia física es mucho menor. Incluso entre Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína, existen grandes diferencias: los grupos criminales actúan de manera distinta, con estructuras, niveles de violencia y formas de penetración política propias.

La violencia es una herramienta de control directo. Según la UNODC, América Latina y el Caribe registran la tasa de homicidios más alta del mundo, con 15.5 por cada 100,000 habitantes en 2021, cifra que supera el promedio global de 6.0. El 70% de estos homicidios en la región están relacionados con armas de fuego, y una parte significativa se vincula a conflictos entre grupos criminales. La corrupción, por su parte, permite la impunidad. La UNODC estima que el costo anual de la corrupción a nivel global asciende a más de 5% del PIB mundial, y una parte sustancial de esta cifra está directamente relacionada con las redes de crimen organizado.

Lo que resulta más preocupante en este sentido es la relación entre crimen organizado y política. Cuando los grupos criminales se infiltran en el Estado, usan a funcionarios y políticos para proteger sus intereses. Esto debilita la capacidad del Estado de atender a la ciudadanía y pone en riesgo la estabilidad política y territorial, sobre todo en países con instituciones frágiles.

En América Latina abundan ejemplos de autoridades cómplices del crimen organizado. En Colombia, grupos paramilitares han desviado recursos públicos, incluso del sistema de salud. En Guatemala, las redes de extorsión operan desde las cárceles con gran impunidad. El costo económico y social de estas prácticas es enorme: en Honduras, se calcula que el crimen organizado equivale a más del 15 % del PIB. Más allá del dinero, el impacto es profundo: fomenta élites corruptas, instituciones débiles y un mal clima para la inversión, según el Banco Mundial.¹

Las redes ilícitas, además, no siempre se muestran de forma evidente. Sus efectos pueden ser sutiles pero persistentes, dependiendo del tipo de régimen político (democrático o autoritario), la fortaleza del Estado y las condiciones locales. Estas redes pueden operar a nivel municipal, departamental o nacional; pueden influir sobre partidos, candidatos o ministros; y pueden aliarse con fuerzas de seguridad, jueces o comunidades enteras.

El papel de los intermediarios es clave: son quienes conectan a criminales con políticos, empresarios o instituciones, y quienes permiten que el dinero ilícito se lave y se integre en la economía formal a través de empresas aparentemente legales.

¹ Moore M. Illicit financial flows and governance: The importance of context // IDS Bulletin. – 2012. – Vol. 43, Nº 3. – P. 477–483.

Lo que también cabe destacar es la vinculación entre el crimen organizado y el narcotráfico. En este sentido, América Latina ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser un negocio ilícito a una red global y diversificada que entrelaza el poder criminal con la política. Desde mediados del siglo XX, los cárteles han evolucionado de estructuras monolíticas a redes más flexibles y descentralizadas. Este fenómeno se explica por la confluencia de la demanda global de drogas, las estrategias gubernamentales de represión y una corrupción institucional que ha facilitado su expansión. El narcotráfico genera ingentes sumas de dinero ilícito. La UNODC ha estimado que la cantidad global de dinero lavado anualmente se sitúa entre el 2% y el 5% del PIB global, lo que equivale a entre \$800 mil millones y \$2 billones de dólares. Estos fondos se infiltran en los mercados formales a través de inversiones inmobiliarias, la construcción y el comercio, creando una economía sumergida que compite deslealmente con las empresas legítimas.

Las organizaciones narcotraficantes han perfeccionado sus estrategias para penetrar en las estructuras estatales y los mercados formales, estableciendo un poder paralelo que desafía la soberanía del Estado. Además, en la esfera política, el narcotráfico ha debilitado la capacidad de los Estados para gobernar. La corrupción facilita que los grupos criminales financien campañas, influyan en decisiones políticas y aseguren su impunidad. En algunos casos, esto ha dado lugar al fenómeno del narcoestado, donde las instituciones funcionan más a favor de los intereses criminales que del bien público (Transparency International, 2022).



Figura 1: El vínculo vital entre crimen organizado y política en América Latina²

² Influencia del crimen organizado en la política y las Instituciones de América Latina

La infiltración en la justicia y la policía genera altos niveles de impunidad. Cuando los sistemas de seguridad y judicial están corrompidos, la población pierde confianza en las instituciones, lo que fomenta la violencia, la justicia por mano propia y la proliferación de grupos armados irregulares.

Asimismo, las consecuencias son graves tanto en la política como en la economía, de modo que el narcotráfico crea estructuras de poder paralelas que debilitan las instituciones del Estado. Esto se traduce en corrupción, debilitamiento del Estado de derecho, fuga de capitales ilegales y el crecimiento de mercados informales fuera del control gubernamental. De esta manera, el narcotráfico se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento de la democracia.

En el plano económico, el narcotráfico genera economías ilícitas que compiten con los mercados formales. Actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el comercio ilegal de armas crean circuitos financieros que afectan la inversión, reducen los ingresos fiscales y limitan la capacidad de los gobiernos para financiar servicios básicos como educación, salud e infraestructura.

También distorsiona el mercado laboral: muchos jóvenes de comunidades vulnerables encuentran en el crimen organizado una alternativa más rentable que el empleo formal. Esto refuerza un círculo vicioso en el que las poblaciones más pobres terminan atrapadas en la economía ilegal, con pocas posibilidades de insertarse en la legalidad.

Un problema adicional es el lavado de dinero, que permite a las organizaciones criminales invertir en sectores estratégicos como la construcción, la agroindustria y las finanzas. Esto genera competencia desleal, fomenta la especulación y puede provocar crisis económicas locales.³

Las raíces del comercio ilícito de drogas se encuentran en los cultivos ancestrales como la coca y el cannabis, que adquirieron una nueva dimensión con la creciente demanda en la década de 1970. En ese contexto surgieron en Colombia los primeros grandes cárteles, como el de Medellín y el de Cali, que establecieron un modelo de negocio del narcotráfico. Liderados por figuras como Pablo Escobar, desarrollaron sistemas de producción, transporte y violencia que marcaron la pauta para futuros grupos criminales.

³ Diretrizes sobre o combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. // GAFI – GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL. - 2021.

La década de 1980 fue el auge de los cárteles colombianos, quienes monopolizaron la exportación de cocaína. El aumento de la violencia llevó a la militarización de la lucha contra el narcotráfico y a la cooperación internacional.

Sin embargo, su enfrentamiento con el Estado y la caída de sus líderes principales en los años 90 llevaron a que el centro de operaciones se trasladara a México. Los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, adoptaron un modelo más fragmentado y empresarial, lo que dificultó su desmantelación.

Actualmente, el narcotráfico ha trascendido a los cárteles tradicionales y se ha transformado en redes criminales más ágiles. La globalización ha permitido a estos grupos expandir sus actividades a otras esferas ilícitas:

- Tráfico de armas: Los cárteles dependen de un constante suministro de armamento para mantener su poder y enfrentar a rivales, lo que se facilita por redes transnacionales de contrabando de armas.
- Lavado de dinero: Utilizan redes financieras internacionales, empresas falsas y criptomonedas para legitimar las ganancias de sus actividades.
- Trata de personas: La explotación de personas se ha convertido en una fuente de ingresos adicional para estos grupos.
- Minería ilegal y otros recursos: Han expandido sus operaciones a la extracción ilegal de oro y otros minerales, generando economías paralelas que escapan del control estatal.
- Contrabando de mercancías: Han infiltrado los circuitos comerciales legales para el contrabando de productos como cigarrillos o productos farmacéuticos.

Hoy el narcotráfico latinoamericano opera en forma de redes diversificadas. La creciente demanda mundial de cocaína ha impulsado nuevas rutas a través de Centroamérica, el Caribe y África Occidental. Países como Brasil, Argentina y Paraguay se han convertido en nodos estratégicos, con organizaciones como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Los grupos criminales han adoptado tecnología avanzada para sus operaciones, incluyendo el uso de drones para vigilancia, criptomonedas para el lavado de dinero y la "dark web" para el comercio de drogas sintéticas. Estas innovaciones les permiten operar con mayor sofisticación y evadir a las autoridades. Debido a su naturaleza desestabilizadora, los

Estados han expresado una creciente preocupación por los vínculos entre el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, como el tráfico de armas. La relación entre estas actividades no es simple: algunos grupos criminales se especializan únicamente en el tráfico de drogas, mientras que otros diversifican sus ingresos a través de múltiples delitos. Los grupos involucrados en el tráfico de drogas varían en su estructura y en sus actividades, y tienen una gran capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno, así como a las acciones de las autoridades y las fuerzas de seguridad, lo que complica los esfuerzos para frenar sus operaciones.

En el ámbito local, las redes ilícitas encuentran un terreno fértil en barrios periféricos y zonas rurales donde el Estado carece de presencia efectiva. Allí, el crimen organizado asume funciones sociales, proporcionando ingresos, infraestructura y mecanismos de control que sustituyen al poder público. Estas dinámicas fortalecen la legitimidad de los grupos criminales en comunidades marginadas.

Los partidos políticos, en distintos países de la región, han establecido vínculos tanto directos como indirectos con organizaciones ilícitas. En ocasiones, estos nexos se traducen en financiamiento electoral proveniente de actividades criminales; en otras, en acuerdos tácitos para garantizar la gobernabilidad en territorios dominados por grupos ilegales. Esta relación mina la democracia, genera dependencia política y limita la capacidad del Estado para actuar contra el crimen.

Más allá del nivel local y de los partidos, las redes ilícitas logran infiltrarse en estructuras centrales del Estado. Ministerios, agencias de seguridad y órganos judiciales han sido objeto de corrupción y cooptación. En algunos casos, las organizaciones criminales llegan a controlar procesos de licitación pública, obstruir investigaciones judiciales o influir en la redacción de leyes. Este fenómeno refuerza la noción de captura del Estado, donde las instituciones formales operan al servicio de intereses ilícitos.

El sector privado desempeña un rol crucial en la consolidación de redes ilícitas, principalmente a través del lavado de dinero. Empresas falsas, bancos y actividades inmobiliarias se convierten en canales para blanquear capitales provenientes del narcotráfico y otras economías ilegales. Esta vinculación distorsiona la economía formal, genera competencia desleal e introduce incentivos perversos que afectan la transparencia del mercado.

Uno de los aspectos más preocupantes del narcotráfico en América Latina es su relación con la violencia y la inestabilidad política. Los conflictos por el control de rutas y territorios entre los carteles ha generado niveles alarmantes de homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos en países como México, Honduras y El Salvador.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022), América Latina es la región con la tasa más alta de homicidios en el mundo, y gran parte de estos crímenes están relacionados con enfrentamientos entre grupos del narcotráfico o con operaciones de represión estatal.

Colombia es un claro ejemplo de cómo el narcotráfico ha escalado la violencia. A pesar de los esfuerzos por la paz, el país sigue enfrentando la violencia de grupos disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales que luchan por el control de los cultivos de coca y las rutas de tráfico. Estos grupos se financian con el narcotráfico y a menudo usan la violencia para intimidar y controlar a las comunidades locales.⁴ A pesar de los avances, la producción de cocaína sigue siendo alta. Según la UNODC, en 2021, el país fue responsable de más del 60% de la producción mundial de cocaína. La implementación de un sistema de información y análisis financiero (UIAF) ha permitido la identificación de más de 2,000 reportes de operaciones sospechosas al año, lo que ayuda a rastrear los flujos de dinero ilícito.

En México, la guerra contra el narcotráfico ha resultado en un incremento de la violencia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, la tasa de homicidios se disparó de 8 por 100,000 habitantes en 2007 a casi 29 por 100,000 en 2018, manteniéndose en niveles elevados. La estrategia de militarización ha llevado a la fragmentación de los cárteles, generando grupos más pequeños y violentos.

En El Salvador, la política de "mano dura" ha mostrado resultados en la reducción de la violencia, con la tasa de homicidios cayendo a 7.8 por cada 100,000 habitantes en 2022, una cifra significativamente menor a las tasas de años anteriores. Sin embargo, estas medidas han generado serias preocupaciones sobre los derechos humanos, lo que subraya la tensión entre seguridad y garantías legales.

La evolución del narcotráfico en América Latina es una muestra de la capacidad de adaptación de los cárteles ante las fallas institucionales y la globalización. Las estrategias tradicionales centradas en la seguridad no han logrado erradicar el problema; por el contrario, han llevado a la fragmentación de los grupos y a un aumento de la violencia.

Para enfrentar esta amenaza, se requiere una estrategia integral y multidimensional que incluya la cooperación internacional, el fortalecimiento de las instituciones, el control financiero de las redes criminales y el desarrollo económico para atacar las causas subyacentes del problema. Sin un enfoque coordinado, el narcotráfico continuará socavando la democracia, la seguridad y el desarrollo de la región.

⁴ Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina. [Электронный ресурс] / International Crisis Group – 2024. – URL: <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/colombia-ecuador-guatemala-honduras-mexico/108-curbing-violence-latin-america-drug-trafficking-hotspots>. – Дата обращения: 02.09.2025.

CAPÍTULO 2: RESPUESTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA DE LOS CÁRTELES DE DROGA EN LA POLÍTICA Y ECONOMÍA

En América Latina, los Estados han implementado una variedad de medidas para limitar la capacidad de los cárteles de droga de penetrar en la esfera política y económica. Estas estrategias combinan acciones legales, institucionales y militares, aunque su eficacia ha variado según el contexto nacional.

En primer lugar, cabe destacar que el aumento de la violencia y el poder de los grupos del crimen organizado ha sido enfrentado principalmente con políticas de “mano dura”. Estas políticas se basan en el uso de medidas represivas: aumentar las penas de cárcel, reducir la edad mínima para ser juzgado penalmente, llenar las prisiones y recurrir a las fuerzas militares en tareas de seguridad. Este enfoque se aplica sobre todo al tema de las drogas, desde la erradicación forzada de cultivos hasta el encarcelamiento de consumidores.

Se trata de la militarización de la seguridad pública, que significa no solo el uso del ejército en funciones internas, sino también la adopción de su lógica: tratar a ciertos grupos sociales como enemigos que deben ser eliminados, en lugar de ciudadanos con derechos. Esto contrasta con un enfoque más civil, donde la seguridad busca mantener la paz social y la fuerza solo se usa como último recurso.

Las políticas de seguridad de “mano dura” en América Latina no se explican únicamente por la ideología política. Tanto gobiernos de izquierda como de derecha han recurrido a ellas: en Uruguay con el PADO, en Brasil con alcaldes del Partido de los Trabajadores y en México con López Obrador, quien, pese a su lema de “abrazos, no balazos” fortaleció la militarización. Esto muestra que el uso de las fuerzas armadas y policiales en seguridad pública se mantiene más allá de las diferencias partidarias.⁵

⁵ Crimen organizado en América Latina [Электронный ресурс] / Friedrich Ebert Stiftung– 2023. – URL: <https://open-resource.ru/spisok-literatury/> – Дата обращения: 02.09.2025.

El problema es que estas políticas tienen pocos resultados en la reducción del crimen y generan costos altos en derechos humanos. Estudios en Colombia y México demuestran que la presencia militar no sólo no disminuye el delito, sino que puede aumentar la violencia una vez terminan los operativos, además de incrementar los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, las intervenciones estatales muchas veces provocan fragmentación de los carteles y luchas internas, elevando aún más los niveles de violencia, como ocurre en México. En contraste, cuando el Estado hace un uso más limitado y selectivo de la fuerza, los niveles de violencia tienden a bajar. Ejemplos de esto son políticas de represión condicional, donde solo se ataca con fuerza a los grupos más violentos, o restricciones judiciales al uso indiscriminado de operativos militarizados, como las que se implementaron en Brasil durante la pandemia.

La lección principal es que el supuesto central de las políticas de mano dura —que más fuerza estatal implica menos crimen— no siempre se cumple. Por ello, se requiere repensar las formas en que el Estado enfrenta al crimen organizado, explorando enfoques más equilibrados y efectivos

Además, es necesario destacar que los Estados han implementado una variedad de medidas para limitar la capacidad de los cárteles de droga de penetrar en la esfera política y económica. Estas estrategias combinan acciones legales, institucionales y militares, aunque su eficacia ha variado según el contexto nacional.

- *Medidas adoptadas por los Estados: seguridad, justicia, prevención, desarrollo alternativo.*

En Guatemala, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con apoyo de Naciones Unidas (2007–2019), representó un esfuerzo inédito para investigar la infiltración del narcotráfico en instituciones públicas. La comisión logró procesar a funcionarios, jueces y políticos por vínculos con el financiamiento ilícito, debilitando las redes de corrupción que sostenían la protección política de grupos criminales.⁶

⁶ Informe final de labores de la CICIG [Электронный ресурс] / La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – 2019. – URL: https://www.cicig.org/cicig/informes_cicig/informe-de-labores/informe-final-de-labores/. – Дата обращения: 02.09.2025.

En Honduras, la reforma constitucional de 2012 permitió la extradición de nacionales a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Esta medida fue un golpe significativo a las élites políticas y económicas vinculadas al negocio, al reducir los márgenes de impunidad. La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022, acusado de haber favorecido a cárteles en el país, ilustró el alcance de este instrumento jurídico.⁷

En Perú, la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) gestiona y redistribuye los activos confiscados a organizaciones criminales. Inmuebles, empresas y vehículos decomisados al narcotráfico son reinvertidos en proyectos sociales y de seguridad. De esta manera, el Estado busca neutralizar la capacidad de los cárteles de sostener redes clientelares mediante la cooptación de economías locales.⁸

En Bolivia, desde 2009 el gobierno impulsó la llamada “nacionalización” de la lucha antidrogas, expulsando a la DEA y creando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). La estrategia combinó control estatal sobre la producción de coca con programas de sustitución concertada de cultivos, evitando la dependencia de comunidades campesinas respecto a circuitos dominados por el narcotráfico.⁹

En México, las medidas han oscilado entre la militarización directa —como la desplegada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012)— y políticas de fortalecimiento institucional, como la creación de la Guardia Nacional en años recientes. Estas reformas han buscado no sólo confrontar militarmente a las organizaciones, sino también reducir su capacidad de infiltración en economías locales mediante el control de mercados estratégicos como el energético y el inmobiliario.

⁷ Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado por narcotráfico y armas de fuego, extraditado a los Estados Unidos desde Honduras [Электронный ресурс] / U.S. Department of State. – 2022. – URL: <https://2021-2025.state.gov/translations/spanish/juan-orlando-hernandez-expresidente-de-honduras-acusado-por-narcotrafico-y-armas-de-fuego-extraditado-a-los-estados-unidos-desde-honduras/>. – Дата обращения: 11.08.2025.

⁸ PRONABI [Электронный ресурс] / Gobierno del Perú. – 2025. – URL: <https://www.gob.pe/pronabi>. – Дата обращения: 02.09.2025.

⁹ UNODC y el monitoreo de cultivos ilícitos [Электронный ресурс] / Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). – 2025. – URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html?tag=Bolivia>. – Fecha de acceso: 02.09.2025.

Finalmente, en Colombia, las políticas han combinado cooperación internacional y programas internos de desarrollo alternativo. El histórico “Plan Colombia” destinó más de seis mil millones de dólares en asistencia militar y social, mientras que el gobierno de Gustavo Petro ha privilegiado la erradicación manual de cultivos con incentivos económicos para los agricultores. Este enfoque busca debilitar la base económica de los cárteles y disminuir la capacidad de estos grupos de financiar actores armados y cooptar autoridades locales.¹⁰

En conjunto, estos casos muestran que la región ha optado por medidas que van desde la extradición y el decomiso de bienes, hasta la creación de comisiones internacionales y fuerzas de seguridad especializadas. Todas ellas buscan responder a un mismo desafío: limitar la capacidad de los cárteles de droga de consolidar poder político y de transformar sus ganancias ilícitas en influencia económica legítima.

Las medidas indiscriminadas, como operativos generales contra el narcotráfico, suelen tener efecto limitado, especialmente en el caso de organizaciones descentralizadas. Estas pueden debilitarse más fácilmente mediante infiltración, erosión de la confianza interna o el desmantelamiento de intermediarios que conectan diferentes células.

En cambio, los grupos altamente centralizados son más vulnerables cuando se apunta a actores clave: enlaces con múltiples conexiones, mandos intermedios o individuos con habilidades especializadas (como lavadores de dinero o químicos). Estos miembros mantienen las operaciones diarias y conectan a la dirigencia con las bases, por lo que su eliminación puede interrumpir la actividad sin provocar necesariamente un aumento en la violencia.

Las estrategias enfocadas en los líderes han tenido resultados mixtos:

- En Guatemala, la eliminación de líderes redujo la violencia, pero no el volumen del tráfico.
- En Colombia, el ataque a la dirigencia de las FARC disminuyó la frecuencia, aunque no la intensidad, de los atentados.
- En México, la captura o muerte de capos aumentó la violencia local debido a la fragmentación de los cárteles.

Atacar a los mandos medios produce efectos más sostenibles y con menos consecuencias negativas que las estrategias de “decapitación” de la cúpula, ya que estos actores cumplen funciones cruciales en la coordinación interna.¹¹

- *Cooperación internacional: ONU, UNODC, OEA, acuerdos bilaterales y multilaterales.*

El narcotráfico en América Latina no solo constituye un problema de seguridad, sino también un desafío estructural para la economía y la gobernanza democrática de la región. Frente a la creciente capacidad de los carteles para infiltrar instituciones estatales y moldear dinámicas económicas locales, la comunidad internacional ha implementado diversas estrategias de cooperación que buscan contener su expansión y reducir sus impactos. Estas respuestas se articulan en varias dimensiones: militar y de seguridad, judicial y legal, financiera, social y de desarrollo, y político-diplomática.

En el plano militar y de seguridad, las iniciativas han estado encabezadas por Estados Unidos mediante programas como el *Plan Colombia* (1999–2015) y la *Iniciativa Mérida* en México (2008–2021). Estas políticas priorizaron la interdicción, la erradicación de cultivos y el fortalecimiento de las fuerzas armadas locales. Si bien lograron reducir parcialmente la producción de drogas y debilitar a ciertos carteles, también generaron altos costos sociales, incluyendo la militarización de la seguridad pública, el desplazamiento forzado y graves violaciones de derechos humanos.¹²

En el ámbito judicial y legal, los tratados de extradición y la cooperación interinstitucional han sido herramientas centrales. Países como Colombia y México han extraditado a líderes criminales a Estados Unidos, lo que debilitó temporalmente a ciertas organizaciones. Sin embargo, la estrategia de “decapitación” también provocó la fragmentación de grupos en facciones más violentas, sin alterar de manera significativa el volumen del comercio ilícito.¹³

¹¹ Informe Mundial sobre las Drogas 2025 [Электронный ресурс] / Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). – 2025. – URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report.html>. – Дата обращения: 02.09.2025.

¹² Lessing B. Making peace in drug wars: Crackdowns and cartels in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

¹³ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Global Report on Cocaine 2023. Viena, Austria: UNODC, 2022.

Desde una perspectiva económico-financiera, organismos multilaterales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han impulsado normativas contra el lavado de dinero y mayor transparencia bancaria. Estas medidas buscan atacar los flujos de capital ilícito que sostienen a las organizaciones criminales. No obstante, los carteles han logrado adaptarse mediante el uso de empresas ficticias, inversiones inmobiliarias y, más recientemente, criptomonedas.¹⁴

Las políticas de desarrollo alternativo y prevención social representan otro pilar de las respuestas internacionales. Programas promovidos por Naciones Unidas y la Unión Europea han impulsado la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos agrícolas legales en países andinos, como el café y el cacao. Aunque estas iniciativas han mejorado el acceso a ingresos lícitos en algunas comunidades, su sostenibilidad a largo plazo ha sido limitada por la falta de infraestructura, la presión de los grupos criminales y la débil presencia estatal.¹⁵ Aquí cabe subrayar la importancia de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988: Estas tres convenciones son la base del régimen internacional de fiscalización de drogas. Establecen las normas para el control de la producción, el uso y la distribución de sustancias psicoactivas.

En el plano político y diplomático, la cooperación multilateral se ha articulado a través de convenciones internacionales, como la de Viena (1988) y la de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional (2000), así como en foros regionales como la OEA-CICAD. La Convención de Palermo es fundamental para entender el marco de cooperación y las obligaciones de los Estados. Sus protocolos adicionales abordan temas como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

En general, estas instancias han permitido la construcción de marcos jurídicos comunes y el intercambio de inteligencia, aunque persisten tensiones respecto a la legalización de ciertas sustancias y la distribución desigual de responsabilidades entre países productores, de tránsito y consumidores.¹⁶

¹⁴ Financial Action Task Force (GAFI). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Latin America report. FATF, 2021.

¹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World drug report. New York: United Nations, 2018.

¹⁶ Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD/OEA). Report on drug control in the Americas. Washington, D.C.: OEA, 2019.

Finalmente, en los últimos años ha cobrado fuerza un enfoque alternativo centrado en los derechos humanos y la reducción de daños, ejemplificado por la legalización del cannabis en Uruguay y los debates sobre regulación en México y Colombia. Estas iniciativas buscan debilitar el poder económico de los carteles y reducir la violencia asociada al mercado ilegal. Sin embargo, su implementación enfrenta resistencias políticas y culturales, así como limitaciones en relación con drogas sintéticas y mercados transnacionales (Aguilar & Gutiérrez, 2021).

¹¹ Informe Mundial sobre las Drogas 2025 [Электронный ресурс] / Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). – 2025. – URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report.html>. – Дата обращения: 02.09.2025.

¹² Lessing B. Making peace in drug wars: Crackdowns and cartels in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

¹³ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Global Report on Cocaine 2023. Viena, Austria: UNODC, 2022.

CAPÍTULO 3: LA PERSISTENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA: UN DESAFÍO ESTRUCTURAL

A pesar de décadas de esfuerzos, el narcotráfico en América Latina ha demostrado una enorme capacidad de resistencia. Lejos de desaparecer, se ha transformado en una red criminal transnacional, adaptable y diversificada, con influencia creciente en la política y la economía regional. Su permanencia revela no sólo las limitaciones de las políticas de seguridad aplicadas hasta ahora, sino también fallas profundas en los Estados latinoamericanos, como la desigualdad social, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho.

Uno de los factores clave que explica esta persistencia es la interdependencia entre el crimen organizado y estructuras socioeconómicas locales. En comunidades marginadas, las economías ilícitas han sustituido al Estado, generando empleo, asistencia y seguridad. De este modo, aunque el narcotráfico es fuente de violencia, también representa un sustento económico para muchas familias vulnerables. La falta de alternativas laborales perpetúa este ciclo, en el que muchos jóvenes ven en las organizaciones criminales la única vía de movilidad social.

Otro elemento central es la corrupción institucional. Los carteles se han infiltrado en gobiernos y campañas políticas, debilitando la capacidad estatal para enfrentarlos (Transparency International, 2022). La impunidad y la colusión de funcionarios han permitido que estas redes operen con protección, dificultando su desarticulación.

Además, el narcotráfico ha mostrado una gran capacidad de adaptación. Tras la fragmentación de los carteles tradicionales, surgieron redes descentralizadas, más difíciles de rastrear y flexibles en sus operaciones. La diversificación hacia nuevas drogas como la metanfetamina y el fentanilo ha ampliado su alcance, mientras que su expansión internacional hacia mercados en África, Asia y Europa ha fortalecido sus finanzas.¹⁷

Las políticas de combate al narcotráfico, centradas en la militarización y represión, han mostrado ser insuficientes e incluso contraproducentes. La captura de líderes criminales ha fragmentado las organizaciones, generando más violencia sin reducir el tráfico de drogas. La llamada “guerra contra las drogas” ha tenido altos costos humanos, como desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos, sin atacar las causas estructurales del problema.

¹⁷ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Global Report on Cocaine 2023. Viena, Austria: UNODC, 2022.

La falta de cooperación internacional efectiva también limita los avances. Aunque existen acuerdos multilaterales, las diferencias de enfoque entre países, la débil coordinación contra el lavado de dinero y la ausencia de regulaciones coherentes en torno al consumo de drogas han frenado los resultados. Frente a este panorama, el narcotráfico debe entenderse no sólo como un problema de seguridad, sino como el reflejo de deficiencias estructurales en gobernanza, economía y justicia social. La represión por sí sola no basta: se requieren políticas que fortalezcan el Estado de derecho, reduzcan la pobreza y amplíen las oportunidades laborales.

El aumento del crimen organizado y la inseguridad exige respuestas integrales, de largo plazo y coordinadas, tanto dentro de los países como entre ellos. Investigaciones recientes y foros, como la Cumbre de Seguridad de Guayaquil (2024), señalan que la estrategia debe apoyarse en cinco ejes principales.

- *Fortalecer al Estado en recursos y capacidades*

Un Estado débil no puede enfrentar al crimen organizado. Por eso es necesario invertir en infraestructura, tecnología e instituciones como la policía y la justicia. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la modernización digital permiten tomar mejores decisiones y diseñar políticas públicas más efectivas.

Además, se requiere más personal y mejor formación, junto con salarios justos que reduzcan la corrupción y aumenten la eficiencia. La cooperación tecnológica entre instituciones nacionales e internacionales es clave para construir un sistema más integrado.

- *Reducir la influencia del crimen en las comunidades*

Cuando el Estado es débil, surgen formas de “gobernanza criminal”: los grupos ilícitos cobran impuestos, reclutan jóvenes e incluso ofrecen servicios que el Estado no garantiza. Esto afecta a millones de personas en América Latina: un 13% de la población vive bajo control criminal.¹⁸ Por eso, además de recuperar el control territorial, los gobiernos podrían reconstruir el tejido social mediante políticas de bienestar que actúen a nivel local y regional. Solo con Estados fuertes, financiados y con instituciones confiables es posible reducir la influencia social del crimen.

- *Cortar las fuentes de financiación y transporte*

¹⁸ Lessing B. Making peace in drug wars: Crackdowns and cartels in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.



El crimen organizado se sostiene con dinero. Bloquear sus flujos financieros y golpear sus estructuras patrimoniales debilita a estas organizaciones. Esto exige comprender sus mercados, costos y actores, apoyándose en minería de datos e inteligencia artificial. La lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de bienes ilícitos sigue siendo limitada: apenas se logra confiscar alrededor del 1% de las propiedades vinculadas al crimen. Por eso, es fundamental fortalecer este frente.

- *Coordinar la respuesta a nivel global*

El crimen organizado no tiene fronteras: opera con redes logísticas internacionales y gran capacidad financiera. Casos de corrupción que involucran a altos funcionarios en América Latina y Europa muestran la magnitud del problema. Frente a esto, la coordinación entre países es esencial. Iniciativas como la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO) buscan reforzar la cooperación regional y la colaboración con la Unión Europea. El reto es que esta cooperación sea constante, con intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas y trabajo en fronteras y puertos.

- *Atacar los pilares sociales del crimen*

El combate no es solo policial o judicial: también es social y cultural. Uno de los principales problemas es la desconfianza ciudadana hacia la policía. Esta desconfianza crea un círculo vicioso: menos apoyo ciudadano significa menos recursos y menos datos para la policía, lo que a su vez reduce su efectividad y profundiza la falta de confianza. Reconstruir esa relación es clave para fortalecer el Estado y limitar el poder del crimen organizado.

CONCLUSIÓN

La presencia del crimen organizado en las instituciones políticas y en el sistema político y económico de América Latina representa una de las mayores amenazas para la estabilidad y el progreso de la región. Aunque los retos son muy grandes, también existen oportunidades de transformación.

La expansión de las redes ilícitas en América Latina se explica por la combinación de prácticas informales y el crecimiento acelerado de un mercado ilegal, impulsado principalmente por la demanda de drogas cada vez más al interior de la propia región. No obstante, esto no se limita a la economía ilícita transnacional. También existen aspectos clave para comprender el poder y la influencia social de estas actividades. Lo central es la formación de redes que vinculan a criminales, políticos y empresarios, lo que explica tanto la debilidad de la respuesta estatal como la fuerte penetración de la ilegalidad en las instituciones y valores públicos. En países como Guatemala y Honduras, esta situación ha intensificado la fragilidad de sus políticas públicas.

En el debate actual, algunos gobiernos como los de Guatemala, Uruguay y Colombia han cuestionado el modelo prohibicionista de drogas, proponiendo reformas que reduzcan los incentivos hacia la ilegalidad y distribuyan de manera más justa los costos de la represión. Sin embargo, la relación entre crimen organizado, Estado y economía formal ha generado una diversificación de actividades ilegales que va mucho más allá del narcotráfico. Estas prácticas se han adaptado a las transformaciones políticas y económicas de las últimas décadas —fin de las dictaduras, descentralización, crecimiento económico y cambios en el Estado— para insertarse en sectores clave de la democracia, la seguridad y la economía.

Los estudios muestran que estas redes ilícitas son muy diversas y difíciles de clasificar. El modelo del “Estado mafioso” ha sido reemplazado por Estados con múltiples canales de influencia ilícita, donde incluso los partidos políticos pierden control sobre sus propios candidatos. A esto se suma el auge del lavado de dinero, que conecta la economía formal con la ilegal, ampliando los vínculos entre ambos mundos.

Por ello, el problema no debe entenderse como una simple invasión de criminales externos a instituciones legítimas, ni solucionarse solo con el fortalecimiento del Estado central, que en ocasiones también se beneficia de estos negocios ilícitos. En cambio, se necesita una política pública más realista y matizada, basada en el entendimiento de la diversidad de estas redes. La estrategia debería enfocarse en crear barreras, controles y mecanismos resistentes a la corrupción, logrando avances graduales o “pequeñas victorias institucionales”, en lugar de buscar soluciones rápidas o absolutas. Además, es necesario que los gobiernos latinoamericanos consoliden sus instituciones, fortalezcan el Estado de derecho y promuevan políticas públicas que combinen justicia social con seguridad ciudadana.



A nivel internacional, los países han reconocido que el narcotráfico es un fenómeno global que no respeta fronteras y que ha logrado influir de manera directa en la política y la economía de varios países de América Latina. Frente a esta amenaza, las respuestas exclusivamente nacionales han demostrado ser insuficientes. De ahí la importancia de reforzar la cooperación internacional, tanto para impedir el financiamiento de los carteles como para frenar el tráfico de armas y drogas que sostienen su poder.

La falta de coordinación entre Estados ha permitido que los grupos criminales aprovechen las diferencias legales y regulatorias para expandirse. Por eso, se requiere armonizar políticas, compartir información y diseñar estrategias conjuntas que reduzcan esas brechas. Al mismo tiempo, la lucha contra el narcotráfico debe incluir el control de la demanda en los países consumidores, así como la creación de sistemas financieros más transparentes capaces de rastrear y bloquear las ganancias ilícitas.

Sin embargo, la cooperación internacional sólo será efectiva si se acompaña de reformas profundas dentro de los Estados latinoamericanos. Esto implica fortalecer la justicia, reducir la corrupción, modernizar los sistemas penitenciarios y sustituir la militarización por modelos de seguridad ciudadana basados en la confianza social y en la prevención.

En definitiva, combatir la influencia de los carteles requiere una estrategia integral y coordinada, que combine compromiso global con transformaciones internas. Solo así será posible limitar el poder político y económico del narcotráfico y avanzar hacia sociedades más seguras, democráticas y justas en la región.

